



# Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Distr. general  
11 de octubre de 2013  
Español  
Original: francés

---

## Comité contra la Tortura 48º período de sesiones

### Acta resumida de la 1063ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el miércoles 9 de mayo de 2012, a las 15.00 horas

*Presidente:* Sr. Grossman

## Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención (*continuación*)

*Segundo informe periódico de Albania (continuación)*

---

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, *dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento*, a la Dependencia de Edición, oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un documento único que se publicará poco después del período de sesiones.

*Se declara abierta la sesión a las 15.00 horas.*

**Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención** *(continuación)*

*Segundo informe periódico de Albania* (CAT/C/ALB/2; CAT/C/ALB/Q/2 y Add.1; HRI/CORE/1/Add.124) *(continuación)*

1. *Por invitación del Presidente, la delegación de Albania vuelve a tomar asiento a la Mesa del Comité.*
2. **El Sr. Peka** (Albania) dice que, en virtud del artículo 112 de la Constitución, la Convención forma parte integrante del derecho interno y, por tanto, es aplicable directamente por los tribunales nacionales. El artículo 250 del Código Penal define una "acción arbitraria" como aquella acción u orden arbitraria contraria a la libertad de los ciudadanos que haya sido cometida o dictada por un funcionario que actúe en nombre del Estado o de un servicio público. Estas acciones son punibles con una multa o una pena de siete años de prisión. En lo que respecta al artículo 86 del Código Penal, en el que se define la tortura, el orador subraya que su aplicabilidad depende de los elementos constitutivos de la infracción.
3. En marzo de 2012 se modificó el Código Penal mediante la promulgación de nuevas disposiciones que penalizan la violencia doméstica. Así, en virtud del párrafo a) del artículo 130 del Código, el hecho de golpear a un cónyuge o excónyuge o de ejercer otras formas de violencia contra dicha persona con el fin de atentar contra su integridad física o psicológica se castiga con dos años de prisión. Si los actos de violencia han provocado una discapacidad o una incapacidad laboral de más de nueve días, la pena aplicable es de cinco años de prisión. En caso de reincidencia, la pena es de uno a cinco años de prisión.
4. En 2011, la Fiscalía para delitos graves investigó 28 denuncias de trata. Dos de ellas, relacionadas con delitos de trata de niños, se sometieron a los tribunales. Otras 13 denuncias fueron archivadas o sobreseídas, mientras que en el caso de las 13 restantes, de las que 9 guardaban relación con delitos de trata de mujeres, 3 con delitos de trata de niños y 1 con delitos de trata de seres humanos, la instrucción todavía está en curso.
5. En 2011, el Tribunal de Primera Instancia para delitos graves juzgó 13 causas de trata y dictó sentencia firme en 11 de ellas. En total, este tribunal ha juzgado o va a juzgar a 18 personas. Seis de ellas han sido condenadas a penas de entre 10 y 15 años de prisión y al pago de 4 a 6 millones de leks en concepto de daños y perjuicios (aproximadamente entre 38.000 y 57.000 euros). Además, el tribunal ha ordenado el embargo de las cuentas bancarias de dos presuntos autores de trata y de sus cómplices, que están siendo enjuiciados en Grecia por diversas infracciones penales, entre ellas la trata de personas con fines de explotación sexual. Esta causa está siendo juzgada en segunda instancia por el Tribunal de Apelaciones de Tirana. En 2011, este último tribunal examinó 12 sentencias dictadas en asuntos de trata. Confirmó 7 sentencias del Tribunal de Primera Instancia, revocó 1 fallo, conmutó la pena y redujo la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios en 2 causas y remitió 1 asunto al Tribunal Constitucional.
6. En cuanto a los tres hombres muertos por herida de bala durante la manifestación del 21 de enero de 2012, el Sr. Peka indica que se ha iniciado un proceso y que los familiares de las víctimas podrán reclamar una reparación en virtud de los artículos 61 a 67 del Código de Procedimiento Penal.
7. El Mediador (o Defensor del Pueblo), cuya figura se creó en virtud de la Ley Nº 8454 de 1999, desempeña la función de mecanismo nacional de prevención. Cuenta con un presupuesto propio, que gestiona de forma independiente. Está facultado para realizar periódicamente visitas no programadas a todos los establecimientos de privación de la

libertad, como comisarías de policía, centros de prisión provisional y prisiones. En ciertos casos, en particular cuando los detenidos presentan secuelas de agresiones y lesiones, el juez ordena que se les realice un examen forense.

8. Un niño solo puede ser privado de libertad por decisión judicial. En las comisarías de policía se han creado unidades especiales para los niños en conflicto con la ley. En Kavaja, la Dirección General de Administración Penitenciaria ha abierto un centro penitenciario con fines educativos para niños infractores. Actualmente se está estudiando la posibilidad de reducir la duración del régimen de aislamiento. En la Dirección de la Policía se ha creado una estructura especializada en la protección de los derechos de las víctimas de la violencia doméstica. Además, el Gobierno ha creado una institución nacional de protección de los derechos del niño y ha adoptado un plan de acción para la protección de los derechos del niño para el período 2012-2015.

9. En lo que respecta al artículo 3 de la Convención, el Sr. Peka indica que las condiciones en que un extranjero puede ser expulsado del territorio o ser devuelto a su país y el procedimiento pertinente están definidos en la Ley N° 9959, de 2008, sobre los extranjeros. De conformidad con el artículo 8 de esta Ley, el Ministerio del Interior puede declarar indeseable la presencia de un extranjero en el territorio nacional en los siguientes casos: si el interesado ha realizado actividades de propaganda o cometido infracciones contra la seguridad nacional o el orden público; si ha sido declarado culpable de un delito y condenado a una pena de más de tres años de prisión; si forma parte de una organización terrorista; si un tribunal internacional ha solicitado su extradición por crímenes de lesa humanidad o por otro delito grave; si forma parte de una organización delictiva dedicada a la trata, el tráfico de drogas u otros tipos de tráfico ilícito. La prohibición de permanencia en el territorio nacional, decretada por el Ministerio del Interior por una duración de diez años, puede ser recurrida ante un tribunal de primera instancia en un plazo de diez días tras la notificación al interesado.

10. Los solicitantes de asilo cuya solicitud haya sido denegada tienen un plazo de diez días para impugnar la decisión de las autoridades ante el Tribunal de Distrito de Tirana. En materia de extradición, Albania aplica el principio de reciprocidad, independientemente de que se haya suscrito o no un acuerdo bilateral con el país en cuestión. En la actualidad no está incoada ante los tribunales ninguna demanda de impugnación de una decisión de devolución por riesgo de tortura en el país de destino.

11. Albania ha acogido a 11 antiguos reclusos de la base de Guantánamo. Dos de ellos ya han abandonado el país. Los 9 restantes tienen el estatuto de refugiados y reciben todas las ayudas públicas asociadas a dicho estatuto. Asimismo pueden asistir a cursos de albanés, beneficiarse de los servicios de un intérprete y recibir formación profesional o estudiar gratuitamente en la universidad, si así lo desean.

12. Las autoridades albanesas no disponen de ninguna información oficial sobre la situación de los aproximadamente 500 niños romaníes que, según una organización no gubernamental (ONG) griega, desaparecieron de un centro de acogida de Atenas. Se invita a dicha ONG a facilitar los datos de que disponga a las autoridades albanesas y griegas competentes con el fin de esclarecer estas alegaciones.

13. Los programas de formación de la policía incluyen cursos temáticos sobre los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que Albania es parte, en particular la Convención contra la Tortura. Estos programas se han diseñado de conformidad con las recomendaciones de los órganos internacionales y nacionales y las conclusiones formuladas por las organizaciones de la sociedad civil en sus informes. También se imparte formación sobre los derechos de la mujer y de las minorías. La Policía Nacional ha adoptado una estrategia de promoción de la diversidad gracias a la cual el 50% de los agentes de policía contratados recientemente son mujeres. Las mujeres que trabajan

en la policía se dedican a funciones delicadas, como la atención de las víctimas de la violencia doméstica, los niños y las presuntas víctimas de la trata.

14. En 2011 se adoptaron varias medidas disciplinarias para castigar a agentes del orden que habían cometido acciones arbitrarias en el ejercicio de sus funciones. Se juzgaron tres asuntos relacionados con el uso ilegal y excesivo de la fuerza y seis asuntos de abusos deshonestos, y algunos de los culpables fueron destituidos o suspendidos de empleo y sueldo durante un mes. De enero a marzo de 2012, seis agentes del orden juzgados por acciones arbitrarias han sido objeto de sanciones disciplinarias. Cuatro de ellos han sido expulsados de la policía por falta profesional, abuso de autoridad o violación del reglamento. En cambio, ningún miembro de las fuerzas del orden ha sido condenado por tortura, pues hasta la fecha no se ha presentado ninguna denuncia de este tipo en Albania.

15. En el derecho interno, la detención y la reclusión son dos nociones distintas. La detención se aborda en el artículo 251 del Código Penal, que dispone concretamente que la policía judicial tiene la obligación de detener a toda persona sorprendida en flagrante delito si la infracción que ha cometido o que se disponía a cometer conlleva una pena de al menos cinco años de prisión. Por su parte, el artículo 253 del Código Penal trata de la reclusión. Prevé que el fiscal puede ordenar la reclusión de un sospechoso detenido si existen motivos razonables para pensar que podría huir de la justicia en caso de ser puesto en libertad. En virtud del artículo 263 del Código de Procedimiento Penal, la duración máxima de la prisión provisional es de tres años si la infracción cometida es punible con una pena de entre diez años de prisión y la cadena perpetua.

16. De conformidad con las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, los derechos de las personas sometidas a interrogatorio están protegidos independientemente del tipo de infracción. La presencia de un abogado permite garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los sospechosos durante el procedimiento. El reglamento general de los establecimientos penitenciarios establece que, a su llegada a prisión, todos los reclusos deben ser examinados por una comisión compuesta por un médico, agentes de policía y trabajadores sociales. Previa petición, se proporcionan copias del expediente médico al detenido, a sus familiares o a su abogado. Según el reglamento de la policía, se deben realizar exámenes médicos a más tardar en las 12 horas siguientes a la detención de un sospechoso. Las consultas médicas se llevan a cabo en privado. Los expedientes médicos son confidenciales y solo pueden ser consultados por el personal médico.

17. En cuanto a las dudas expresadas respecto de la imparcialidad de las investigaciones llevadas a cabo por el Servicio de Vigilancia Interna de la Policía sobre las denuncias de brutalidad policial, el orador dice que este órgano es independiente, que su mandato está totalmente definido y que dispone de su propio presupuesto. Por otro lado, las investigaciones penales sobre estos asuntos se llevan a cabo bajo la autoridad de la fiscalía. El hacinamiento en las prisiones está disminuyendo de forma progresiva gracias a las medidas adoptadas, como la remisión condicional de las penas, el establecimiento de penas sustitutivas, la utilización del brazalete electrónico y, sobre todo, la asignación de recursos para abrir nuevos centros de reclusión. No existe ninguna prueba oficial que demuestre que el hacinamiento en los establecimientos de prisión provisional se debe a la lentitud de la justicia.

18. Como se indica en los párrafos 99 y 107 de las respuestas escritas, se han llevado a cabo importantes obras de renovación en varios establecimientos penitenciarios y centros de prisión provisional del país, así como en las celdas de las comisarías de policía de unas seis ciudades.

19. Las disposiciones del artículo 22 de la Convención son aplicables, ya que Albania no ha formulado reserva alguna respecto de este instrumento. En todos los establecimientos penitenciarios del país se informa debidamente a los presos de sus derechos. Como indica

el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes en su informe sobre la visita que realizó a Albania en 2010, se han introducido modificaciones en el reglamento penitenciario y se han realizado inversiones para mejorar las condiciones de reclusión. Todas las denuncias relativas a cualquier tipo de violencia en los centros de reclusión son examinadas. Las autoridades penitenciarias han adoptado un procedimiento normalizado de recogida de información sobre los casos de violencia basado en el Protocolo de Estambul. Los establecimientos penitenciarios están equipados con un sistema de videovigilancia. Con respecto a los fallecimientos ocurridos en dichos establecimientos, las informaciones oficiales indican que se debieron a causas naturales; se recopila información sobre cada fallecimiento.

20. En cuanto a la detención administrativa, el orador indica que la Ley sobre la Policía Estatal prevé la posibilidad de conducir a una persona que ha infringido una norma administrativa a una comisaría de policía para identificarla, con o sin su consentimiento. En ese caso, el interesado no comparte celda con las personas que están en prisión provisional, y solo puede permanecer recluido un máximo de diez horas. En cuanto a las medidas disciplinarias aplicables durante la detención policial, estas son propuestas por los comisarios de policía y aprobadas por los directores regionales de la policía. La aplicación de estas medidas puede interrumpirse si el detenido presenta una denuncia contra la policía.

21. El nuevo centro penitenciario con fines educativos de Kavaja, destinado a los niños de entre 14 y 18 años, acoge actualmente a 51 menores. En este establecimiento se imparte a los niños enseñanza general y formación profesional para facilitar su reinserción; también se les proponen actividades de esparcimiento. La Constitución y el Código de Procedimiento Penal contienen diversas disposiciones específicas relativas al trato de los niños reclusos o detenidos, que prevén en particular la obligación de comunicar sin demora la detención del niño al fiscal y a sus progenitores o tutor e informar al niño de sus derechos, en especial el derecho a recibir asistencia letrada; la obligación de interrogar al niño en presencia de su representante legal o tutor, de proporcionarle asistencia médica y de adoptar las medidas necesarias para proteger su salud; y la obligación de informar rápidamente al fiscal de las declaraciones del niño para garantizarle condiciones de detención seguras. Los niños siempre permanecen separados de los adultos durante su reclusión.

22. La posibilidad de recluir a niños en régimen de aislamiento durante un período de diez días se ha previsto en aplicación de una directiva publicada en 2009 por la Dirección General de Administración Penitenciaria. El Gobierno de Albania está dispuesto a revisar la cuestión a la luz de las recomendaciones formuladas a este respecto por el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura. Se podrán introducir modificaciones en el reglamento penitenciario para reducir de diez a tres días la duración máxima de las medidas disciplinarias impuestas a los niños.

23. Se ha establecido un régimen penitenciario especial de carácter semiabierto para las mujeres privadas de libertad. El personal que se ocupa de ellas está compuesto totalmente por mujeres. Los hombres y las mujeres permanecen reclusos por separado, y se prestan servicios sociales a los hijos de las reclusas. Por otro lado, la vigilancia electrónica se lleva a cabo mediante un sistema de localización por GPS; no se utiliza ningún sistema de grabación audiovisual.

24. Desde septiembre de 2011, la policía utiliza un manual detallado que versa en particular sobre el trato que se debe dispensar a las personas en detención policial y sobre el respeto de sus derechos. De mayo a septiembre de 2012 se impartirá un programa de formación en el que participarán unos 500 agentes de policía a quienes afecta directamente la cuestión del trato de los reclusos. La segunda fase del programa, que se integrará en el plan de formación de la Academia de Policía, tendrá lugar de septiembre a diciembre de 2012. Por otro lado, la policía y las autoridades penitenciarias han suscrito acuerdos de

cooperación con varias ONG de defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

25. La delegación no dispone de información sobre el curso dado a la circular del Fiscal General a que se hace referencia en el párrafo 157 del informe y desconoce si se han emitido nuevas circulares, pero podrá facilitar por escrito al Comité los datos requeridos.

26. El Gobierno está resuelto a mejorar las condiciones de vida de los niños y, desde la ratificación por Albania de la Convención sobre los Derechos del Niño, realiza cada vez más esfuerzos para proteger los derechos de todos los niños y velar por su respeto mediante la aplicación de políticas nacionales y marcos jurídicos e institucionales adaptados. La Ley de protección de los derechos del niño aprobada en 2010 contiene una definición de "niño" y prevé la creación del Servicio Nacional de Protección de los Derechos del Niño. Por otro lado, el Parlamento ha modificado el artículo 16 del Código Penal, que actualmente dispone que toda persona que someta a un niño del que sea legalmente responsable a malos tratos físicos o psicológicos será castigada con una pena de entre dos meses y dos años de prisión.

27. Según los resultados de la encuesta demográfica y sanitaria realizada en 2008-2009, el 98% de los partos tuvieron lugar en un establecimiento de salud público. En las maternidades se expide una partida de nacimiento con arreglo a la cual el niño debe ser inscrito en el registro civil en un plazo de 60 días. En cuanto a los niños nacidos en el extranjero, todas las embajadas y representaciones consulares albanesas prestan servicios de expedición de partidas de nacimiento. Las partidas deben enviarse posteriormente a los servicios competentes del registro civil en Albania.

28. Se han aprobado varias disposiciones para indemnizar a las víctimas de la tortura, a los antiguos presos políticos y a las víctimas de persecución. Cabe citar en particular: la Ley N° 9831, de 12 de noviembre de 2007, sobre la indemnización de los antiguos presos políticos del régimen comunista, cuyo fin es definir a los beneficiarios, determinar los montos y establecer los criterios de selección y los procedimientos aplicables a la concesión de una indemnización pecuniaria a los antiguos presos políticos que sufrieron directamente persecuciones durante el régimen comunista; y la Decisión N° 933 del Consejo de Ministros, de 17 de noviembre de 2010, sobre el establecimiento de procedimientos administrativos para el examen de las solicitudes de indemnización de los familiares de las víctimas que fueron ejecutadas por motivos políticos y sin juicio previo durante el período comprendido entre el 30 de noviembre de 1944 y el 1 de octubre de 1991.

29. En cuanto a la admisibilidad de las pruebas, el párrafo 4 del artículo 151 del Código de Procedimiento Penal dispone que toda prueba obtenida por medios ilegales es inadmisibile, y el Tribunal Constitucional, en su resolución N° 14 de 3 de mayo de 2011, consideró que toda declaración obtenida mediante violencia era inadmisibile. Además, la inadmisibilidat podía declararse en cualquier momento del procedimiento.

30. **La Sra. Milo** (Albania) dice que la protección de los derechos de las minorías nacionales y etnolingüísticas está garantizada por una convención marco aplicable a todos los albaneses pertenecientes a una minoría. Dado que la práctica de establecer "zonas de minorías" se abandonó hace más de veinte años, no se ejerce discriminación territorial alguna. En 2010, el Parlamento aprobó la Ley contra la discriminación, que se elaboró en colaboración con diversas ONG de defensa de los derechos humanos y que tiene como objetivo eliminar cualquier discriminación por motivos de raza, religión u origen étnico, entre otras razones. En virtud de esta Ley se ha creado la figura del Comisionado para la Lucha contra la Discriminación, que se encarga de vigilar la situación en el país, detectar las violaciones y formular propuestas para hacer frente al problema.

31. **El Sr. Peka** (Albania) dice que Albania considera que ha finalizado su transición y que actualmente es un país democrático basado en el principio de la primacía del derecho y dotado de una economía de mercado. Albania debería recibir la categoría de país candidato

a la adhesión a la Unión Europea, y a partir de mayo de 2012 ocupará la presidencia del Comité de Ministros del Consejo de Europa.

32. Como ha subrayado el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Sr. Alston, el fenómeno de las contiendas sangrientas entre familias en Albania constituye un problema anacrónico al que el Gobierno presta toda la atención que merece. Se han realizado avances al respecto, y el Gobierno tendrá en cuenta las recomendaciones del Sr. Alston al aplicar las medidas que seguirá adoptando para erradicar este fenómeno.

33. **La Sra. Milo** (Albania), en relación con las preguntas relativas a los centros de reclusión secretos y a las desapariciones y asesinatos que se habrían cometido en Albania después de la guerra de Kosovo, dice que el Gobierno considera que las acusaciones que figuran en el informe de la Comisión de Cuestiones Jurídicas y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (denominado "informe Marty") son falaces y se basan en suposiciones. El Gobierno de Albania lamenta que el Sr. Alston, en la parte de su informe sobre Albania donde aborda estas cuestiones, se haya basado en gran medida en el informe de la Comisión, cuyas conclusiones son infundadas y no se apoyan en ningún hecho o prueba. Las autoridades albanesas han manifestado en varias ocasiones su voluntad de cooperar plenamente con las instituciones internacionales competentes, con la misión policial y judicial de la Unión Europea en Kosovo (EULEX) y con el Consejo de Europa con el fin de establecer la verdad. Aunque la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia no se extiende a Albania, el Gobierno del país brindó su plena colaboración al grupo de investigación del Tribunal en 2004, así como al Sr. Marty en la misión que realizó a Albania en 2008. Cabe recordar a este respecto que el Tribunal consideró infundadas las acusaciones de que Albania estaba implicada en un caso de tráfico de órganos. En agosto de 2011, un grupo especial de investigación de EULEX examinó las acusaciones que figuraban en el informe de la Comisión, y Albania invitó a dicho grupo a investigar en profundidad y con transparencia todos los aspectos de esas acusaciones que concernían al territorio albanés, para lo cual le brindó todo su apoyo.

34. Se han aplicado las recomendaciones del Comité sobre los servicios de atención de la salud en los centros de reclusión, incluida la de brindar a los reclusos la posibilidad de elegir a su médico. Todas las personas que ingresan en un centro de reclusión son sometidas a un examen médico sin la presencia de otros miembros del personal. Las informaciones médicas que les afectan se registran en su expediente médico y dental, según un procedimiento común al conjunto del sistema penitenciario. Las pruebas médicas para detectar enfermedades infecciosas no se realizan en las primeras 24 horas, sino en un plazo que depende del estado clínico de cada recluso; primeramente se efectúan las pruebas de laboratorio e imagen, que después se complementan durante los días siguientes. Los reclusos se benefician gratuitamente de todos los servicios médicos necesarios, incluidos los servicios especializados.

35. En virtud de la Ley sobre salud mental de 2012, el Ministerio de Sanidad ofrece a los reclusos con trastornos mentales todos los servicios de diagnóstico, tratamiento y readaptación que necesiten. Los profesionales de la salud que trabajan en las comisarías y en el sistema penitenciario reciben una formación continua, en particular en el ámbito de la salud mental. Dada la escasez de psiquiatras fuera de la capital, las consultas psiquiátricas suelen realizarse en el establecimiento de salud público más próximo. Solo se pueden emplear medidas de coerción física (inmovilización, administración forzosa de medicamentos y reclusión en régimen de aislamiento) en establecimientos de atención de la salud mental de carácter residencial y por prescripción de un psiquiatra. La delegación no dispone de estadísticas sobre la administración forzosa de medicamentos, pero pone a la disposición del Comité todos los documentos e informes que obran en su poder.

36. De conformidad con la recomendación del Comité, se están aprobando disposiciones legislativas para que el personal médico de los establecimientos penitenciarios pase a depender del Ministerio de Sanidad. Asimismo, el conjunto de los establecimientos especializados de atención de la salud mental destinados a los reclusos y a las personas con trastornos mentales que han cometido un delito y que deben seguir un tratamiento por orden de un tribunal depende actualmente del Ministerio de Sanidad. Las normas relativas a las condiciones de higiene en los centros de reclusión son fijadas por los Ministerios de Justicia y de Sanidad mediante directivas conjuntas. Por su parte, el Servicio de Inspección Sanitaria se ocupa de inspeccionar todos los centros de reclusión al menos dos veces al año.

37. **El Presidente** (Relator para Albania) pregunta si la Convención se puede invocar directamente ante los tribunales. Recuerda el caso de dos policías que fueron acusados de golpear gravemente a tres jóvenes durante su detención en Tirana, e indica que estos policías fueron inculcados por la infracción prevista en el artículo 250 del Código Penal —acción arbitraria— y no por la infracción de tortura, que está contemplada en el artículo 86. Añade que uno de esos policías fue condenado a una multa de un monto equivalente a 15 dólares. Este ejemplo ilustra una tendencia que el Comité ha observado en varios Estados partes, y que consiste en inculpar a policías acusados de tortura por infracciones que conllevan una condena más leve a la aplicable a los actos de tortura. A este respecto, el Comité desearía saber qué medidas se están adoptando para garantizar que las penas impuestas a los autores de actos de tortura sean proporcionales a la gravedad de esos actos.

38. El aumento del número de casos de violencia doméstica denunciados a la policía pone de manifiesto que la población está sensibilizada con el problema, lo cual es positivo. Convendría saber si, por su parte, las autoridades policiales y judiciales actúan con la diligencia necesaria en este tipo de casos. La política de feminización de los efectivos de la policía llevada a cabo por el Estado parte propicia ciertamente que se examinen mejor las denuncias de violencia doméstica. Se invita a la delegación a proporcionar informaciones precisas sobre las investigaciones y los enjuiciamientos a que han podido dar lugar estas denuncias. También sería interesante saber qué penas prevé la ley para los actos de violencia doméstica, si dichas penas ya se han impuesto y si la violación en el matrimonio constituye un delito independiente en el Código Penal de Albania.

39. La designación del Mediador como mecanismo nacional de prevención refuerza la importancia del papel que este desempeña en el logro del objetivo general de la Convención. Para que pueda ejercer eficazmente esta función debe disponer de recursos suficientes. A este respecto, convendría que la delegación precisara el presupuesto que le ha sido asignado. Los castigos corporales se han percibido durante mucho tiempo como parte integrante de la educación de los niños en numerosas culturas; esta visión tradicional de la educación no parece haber desaparecido totalmente en el Estado parte. En este contexto, sería interesante saber si en Albania existe una ley que prohíba expresamente todos los castigos corporales. En lo que respecta al régimen de aislamiento, solicita a la delegación que indique si su aplicación a niños está prevista expresamente por la ley y, en caso afirmativo, en qué circunstancias y por qué motivos se autoriza.

40. En cuanto al artículo 3, el Presidente pregunta si el Estado parte considera que la obtención de seguridades diplomáticas constituye una garantía suficiente para devolver a personas a un país cuando existan razones para creer que en él dicha persona estaría en peligro de ser sometida a tortura. En lo que respecta al internamiento forzoso de pacientes con trastornos psiquiátricos, el orador solicita a la delegación que indique si este procedimiento está previsto por la ley y, concretamente, si los jueces examinan periódicamente todos los casos de pacientes internados contra su voluntad y si la ley garantiza a estos pacientes el derecho a solicitar la revisión del internamiento.



41. **El Sr. Gaye** (Relator suplente para Albania) dice que su intervención se centrará en las cuestiones relativas a los artículos 10 a 16 de la Convención. En lo que respecta a la formación, desearía saber si se imparte al personal médico y judicial una formación específica basada en el Protocolo de Estambul sobre la forma de detectar los signos de tortura. Según las respuestas proporcionadas por la delegación, parece que, en la mayoría de los casos, los agentes del orden que cometen violaciones en el ejercicio de sus funciones son objeto de un procedimiento disciplinario y rara vez son enjuiciados. Esto plantea la cuestión de saber de qué forma se garantiza el derecho de reparación de las víctimas en ausencia de un proceso judicial. Además, incluso cuando se inician acciones penales, la calificación de los hechos imputados a los funcionarios en cuestión corresponde generalmente a la de infracciones castigadas con penas más leves que las que conlleva el delito de tortura. El caso citado en el informe del Estado parte (párr. 255), a saber, la condena de un policía a tres años de prisión por "violación de las normas del servicio" a raíz de que un recluso falleciera como consecuencia de los malos tratos que este policía le infligió, ilustra perfectamente el problema. El orador desearía que la delegación proporcionara aclaraciones al respecto.

42. La delegación ha facilitado informaciones útiles respecto de la distinción entre detención y reclusión. No obstante, el Sr. Gaye no está seguro de haber comprendido a qué corresponde el plazo de 12 horas mencionado, y solicita a la delegación que precise si se trata del plazo en que toda persona detenida por la policía debe ser llevada ante un juez. También desea saber si la ley fija una duración máxima de la prisión provisional. Esta cuestión es fundamental desde la perspectiva de la prevención de la tortura, porque es de sobra conocido que cuanto más largo es el período de reclusión, mayor es el riesgo de tortura. La delegación ha indicado que la fiscalía vigila la situación de todas las personas en detención policial. Sería útil que la delegación proporcionara aclaraciones sobre las modalidades de esa vigilancia.

43. Numerosas ONG han denunciado la ineficacia del sistema judicial. Se invita a la delegación a que indique si se prevén medidas para reforzar la independencia del sistema y mejorar la formación de todos sus actores. La eficacia de la labor del Mediador depende ciertamente de los recursos que se le asignan, pero también del alcance de sus facultades, las cuales se deberían reforzar para que aquel pueda intervenir directamente en los casos de violación de los derechos humanos.

44. **El Sr. Bruni** desearía saber si se han analizado las conclusiones de las visitas que el Mediador ha realizado a los lugares de reclusión en cuanto mecanismo nacional de prevención y, en caso afirmativo, qué ámbitos de acción prioritarios se han determinado gracias a dicho análisis. El hecho de que el Estado parte haya ratificado la Convención sin formular reserva alguna es muy positivo, pero ello no basta para expresar oficialmente que se acepta el procedimiento de examen de las comunicaciones presentadas por particulares previsto en el artículo 22. Para ello se debe realizar la declaración específicamente requerida a tal efecto. Se invita a la delegación a confirmar que el Estado parte tiene la intención de realizar dicha declaración. El artículo 8, párrafo 2, de la Convención establece que si un Estado parte recibe una solicitud de extradición de otro Estado parte con el que no tenga tratado al respecto, podrá considerar la Convención como la base jurídica necesaria para la extradición. El orador pregunta si el Estado parte reconoce la Convención como base jurídica para la extradición.

45. **El Sr. Mariño Menéndez** pregunta si la legislación del Estado parte prevé, respecto de ciertos tipos de infracción como el terrorismo o el tráfico de drogas, la posibilidad de ordenar la incomunicación de los sospechosos. Cree entender que la concesión de la nacionalidad albanesa se basa en el derecho de filiación, y pregunta si, en ese caso, la delegación puede confirmar que el Estado parte concede la nacionalidad albanesa a los hijos nacidos en el extranjero de progenitores albaneses.

46. **La Sra. Gaer** dice que su pregunta sobre si ya se ha juzgado y condenado a policías por denegación de asistencia a personas en peligro en asuntos de violencia doméstica sigue sin respuesta. Desearía que la delegación facilitara información al respecto. En cuanto a las contiendas sangrientas entre familias, sería útil disponer de datos desglosados según el sexo de las víctimas. Asimismo se agradecería recibir estadísticas sobre los delitos de honor y el número de procesos penales iniciados por delitos de trata en el país.

47. **La Sra. Belmir** solicita aclaraciones sobre la Ley N° 10347 de protección de los derechos del niño que el Estado parte promulgó en 2010. Desearía saber en particular si dicha Ley contiene una definición del niño que esté en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño y si protege los derechos de los niños en conflicto con la ley. A propósito de la distinción entre detención y reclusión, en ambos casos la persona está privada de libertad y, por tanto, bajo la responsabilidad del Estado; así pues, las obligaciones de los agentes estatales con respecto a la Convención son las mismas en ambas situaciones.

48. **El Sr. Tugushi** dice que en la sesión precedente preguntó si se había aumentado el presupuesto del Mediador desde su designación como mecanismo nacional de prevención. No cree que la delegación haya respondido a esta pregunta, ni que haya facilitado explicaciones sobre el hecho de que las personas contra quienes se dicta un auto de prisión provisional suelen permanecer reclusas en los establecimientos policiales más allá del plazo prescrito por la ley. Se agradecerá cualquier información complementaria que la delegación pueda aportar sobre estas dos cuestiones.

49. **La Sra. Sveaass** desearía recibir más información sobre la atención médica, en particular psicológica, dispensada a los antiguos presos de Guantánamo cuando llegaron a Albania. Pregunta si la formación relativa a la utilización del Protocolo de Estambul a que hace referencia la delegación va dirigida únicamente al personal judicial o también a los profesionales de la salud. La delegación ha declarado que no dispone de ninguna información oficial sobre los 502 niños romaníes desaparecidos. Sin embargo, la oradora dice que ha visto una lista con el nombre de los niños y que, según ciertas fuentes, 4 de ellos habrían sido localizados. Estos niños llevan desaparecidos ya varios años, por lo que es urgente adoptar medidas para encontrarlos en colaboración con las autoridades griegas. La oradora pregunta a la delegación si, cuando afirma que no se han presentado denuncias por tortura en Albania, quiere decir que no se han presentado recientemente. En ese caso, pide a la delegación que indique la última vez en que se ha presentado una denuncia por tortura en el país. Por último, toma nota de que existe un programa de readaptación e indemnización para las personas que fueron encarceladas y torturadas bajo el régimen comunista, y pregunta si también se prevén medidas de reparación para las personas torturadas durante la transición.

50. **El Presidente** agradece a los miembros del Comité sus preguntas complementarias y, a solicitud de la delegación albanesa, propone suspender la sesión durante algunos minutos para que la delegación pueda preparar sus respuestas.

*Se suspende la sesión a las 17.05 horas y se reanuda a las 17.20 horas.*

51. **El Sr. Peka** (Albania) dice que el Gobierno decidió confiar la función de mecanismo nacional de prevención al Mediador porque se trata de una institución fundada en la Constitución y dotada de su propio presupuesto. Como consecuencia de ello se modificó la Ley del Mediador, se dotó a la Oficina del Mediador de cinco puestos adicionales para llevar a cabo las actividades relacionadas con la nueva función y se aumentó su presupuesto para cubrir los gastos correspondientes. Cabe subrayar a este respecto que la Ley del Mediador de Albania se diseñó sobre la base de las mejores prácticas de los países europeos y de los países nórdicos, en especial Dinamarca. Una crisis política en el seno del Parlamento provocó que el puesto de Mediador quedara vacante

durante los últimos dos años, pero actualmente el puesto está cubierto y es plenamente operativo.

52. Los antiguos presos de Guantánamo acogidos en Albania eligieron libremente ser transferidos al país. Reciben prestaciones sociales y se les han facilitado todos los documentos necesarios, incluido un permiso de trabajo. En cuanto a su posible reasentamiento en otro país, habría que examinar las circunstancias y todo un conjunto de factores; en todo caso, lo esencial para el Gobierno de Albania es cumplir de forma efectiva sus obligaciones internacionales en materia de protección de los derechos humanos y asegurarse de que estas personas vivan en paz en el seno de la sociedad y estén protegidas contra el peligro y las persecuciones, ya sea en su país de origen o en un tercer país.

53. En cuanto a las investigaciones realizadas sobre lo ocurrido a los 502 niños romaníes de Albania que según parece han desaparecido, el Gobierno desea señalar que se preocupa por cada uno de sus ciudadanos y vela por su protección, tanto en el territorio albanés como en el extranjero. No se ha recibido información alguna de las fuerzas del orden griegas ni del Gobierno de Grecia, pero Albania hará todo lo posible para obtener las informaciones requeridas y cooperar al máximo con Grecia y con cualquier otra parte interesada.

54. El programa de indemnización de los antiguos presos del régimen comunista prosigue. En los últimos veinte años, los sucesivos gobiernos han puesto en marcha diversos mecanismos y dispositivos para facilitar la vida a estas personas y ayudarlas a adaptarse al nuevo sistema, en particular ofreciéndoles cursos de formación profesional, una ayuda en materia de vivienda y la escolaridad gratuita de sus hijos en todos los niveles educativos. También se les concede una indemnización por los años pasados en prisión.

55. Las instancias judiciales albanesas son totalmente independientes del Gobierno, que no puede en modo alguno influir en las decisiones de los tribunales. En todo caso, la mejor forma de garantizar la independencia del poder judicial es velar por la ausencia de conflictos de intereses. Albania ha avanzado mucho en la creación de instituciones democráticas y responsables, en particular en el sector de la justicia. Todavía queda trabajo por hacer, pero el país está decidido a establecer un sistema judicial sólido, democrático e independiente.

56. **La Sra. Milo** (Albania), a la pregunta de si los niños albaneses nacidos en el extranjero reciben la nacionalidad albanesa, responde que el derecho de filiación es un principio muy importante para su país y que todo niño nacido de al menos un progenitor albanés obtiene la nacionalidad albanesa.

57. **El Sr. Tafa** (Albania), en relación con la aplicación de los artículos 86 y 250 del Código Penal, aclara que, si se presenta una denuncia por tortura o malos tratos, corresponde a la fiscalía y no a la policía presentar cargos. A la delegación no le consta ninguna acción judicial por tortura hasta la fecha. En cuanto a la indemnización de las víctimas, tanto la legislación civil como el Código de Procedimiento Penal garantizan a las víctimas de tortura el derecho a solicitar reparación.

58. En relación con la violencia doméstica, los casos notificados a la fiscalía fueron 472 en 2009, 439 en 2010 y 495 en 2011. Los casos en que se solicitó una orden de protección fueron 841 en 2009, 1.234 en 2010 y 1.345 en 2011. A este respecto, conviene subrayar que todavía no ha habido ningún caso de denegación de protección por parte de policías. Los agentes del orden son plenamente conscientes de que dicha denegación tendría consecuencias graves y que deben respetar estrictamente esas órdenes y ofrecer la protección requerida. La violación en el matrimonio no está tipificada específicamente como infracción, pero está incluida en la definición general de violación.

59. En cuanto a la imposición de castigos corporales a niños, en 2010 se aprobaron una ley y un plan de acción para la protección de la infancia, y se han creado instituciones para controlar su aplicación. Asimismo, el Código Penal se ha modificado recientemente para prohibir la violencia física y psicológica contra niños por parte de sus progenitores, familiares o tutores legales y castigar tales actos con penas de hasta dos años de prisión. En lo que respecta a las contiendas sangrientas entre familias, este año no se ha registrado ninguna. En abril de 2012 se registró un delito de honor.

60. En caso de detención, la Ley sobre la policía de Albania prevé que se puede conducir a una persona a instalaciones policiales para llevar a cabo verificaciones, y que dicha persona puede permanecer allí durante un máximo de diez horas. En lo que respecta a la prisión provisional, esta se aplica en los casos en que la ley prevé una pena de entre diez años de prisión y cadena perpetua. Su duración máxima difiere según el tipo de infracción, pero no puede superar los tres años de prisión, de conformidad con el artículo 263 del Código de Procedimiento Penal.

61. Se hace todo lo posible para proporcionar al personal judicial la mejor formación posible. Los jueces reciben formación en la Escuela Superior de la Magistratura, y participan también en numerosos cursos impartidos por expertos internacionales en el marco de proyectos financiados por la Comisión Europea. Si bien es cierto que en Albania no existe ningún tribunal de menores, los tribunales de distrito tienen secciones específicas encargadas de los asuntos en que estén implicados niños, cuyos jueces reciben una formación especializada.

62. En cuanto a la evaluación de los informes del mecanismo nacional de prevención, el orador indica que el informe del Mediador es objeto de un examen minucioso que alcanza el nivel jerárquico más alto de la policía del Estado. Como resultado de las recomendaciones del Mediador y de otros actores, las principales prioridades de Albania son reforzar las capacidades y la formación profesional de los funcionarios penitenciarios y mejorar las condiciones de los centros de reclusión para que estén en conformidad con las normas internacionales. Existe un plan anual de formación de funcionarios de policía, en cuyo marco se imparten diversos cursos sobre derechos humanos.

63. En respuesta a la pregunta de si la Convención se utiliza como base jurídica para la extradición, el orador dice que, hasta la fecha, esto no se ha producido nunca. La posibilidad no está excluida, pero los únicos acuerdos o tratados invocados como base jurídica hasta el momento son los suscritos con los Estados Unidos e Italia.

64. **El Sr. Betija** (Albania), en respuesta a la pregunta relativa al internamiento forzoso, dice que los jueces deben respetar el procedimiento previsto en el artículo 239 del Código Penal, que dispone que la hospitalización de una persona en una institución psiquiátrica debe interrumpirse si el interesado ya no presenta trastornos psíquicos. Los jueces tienen la obligación de reexaminar anualmente los casos de todas las personas afectadas por una medida de internamiento forzoso, y la Ley sobre salud mental aprobada en marzo de 2012 prevé que, cuando ya no se apliquen las razones que motivaron el internamiento forzoso, el director del establecimiento en cuestión, un progenitor o el tutor legal del paciente pueden solicitar al juez la finalización del internamiento.

65. **El Presidente** agradece a la delegación sus respuestas.

*Se levanta la sesión a las 18.00 horas.*